6-Dic-88

PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

De nuevo, la UNAM El trabajo y la sucesión

Treinta y cinco días después de iniciada la huelga legal más prolongada que por motivos laborales haya vivido la Universidad Nacional, hoy se reanudan allí las clases, interrumpidas una semana después de iniciado el primer semestre de 1989. El sindicato de empleados administrativos admitió un regreso sin gloria, pues no obtuvo más de lo que originalmente se le había ofrecido. Pero evita estragos mayores y pone a la institución en la posibilidad de que su rector no sea escogido por la Junta de Gobierno ante la ausencia de quienes integran la principal casa de estudios del país.

El retorno entraña graves problemas para la Universidad, cuyas relaciones de trabajo han quedado maltrechas por las vicisitudes propias de un movimiento de esta naturaleza, a las que se agregaron actitudes de rudeza innecesaria del Abogado General; y también para el sindicato, que enfrenta el riesgo de partirse a la mitad, lo que debilitaría al gremio más fuerte e importante de los no adscritos al obrerismo oficial. Tiempo tendrán la institución y su sindicato de procesar sus dificultades. Por ahora, la urgencia acuciante de la institución es el nombramiento de quien la regirá en los próximos cuatro años.

La Junta de Gobierno registró casi medio centenar de aspirantes a la Rectoría, y a partir de ella formuló su propia nómina, integrada por 13 personas, a quienes entrevista en estos días. En la integración de ese grupo sobresale la presencia de tres médicos (Jaime Martuscelli, Fernando Cano Valle y José Narro Robles) que ratifica la influencia, excesiva a la luz de la diversidad universitaria, que esa profesión ha tenido en la conducción de la UNAM. Sorprende, además, la inclusión del primero de ellos, que acaba de

concluir una etapa en el servicio público, como subsecretario en la SSA. El hecho no tiene nada de objetable en sí mismo, pero habiendo al menos otros doce universitarios *de dentro*, en situación de convertirse en rector, no parece prudente considerar para el caso a alguien venido de fuera. La última vez que eso ocurrió fue en 1966, pero se trataba de una verdadera emergencia, por la ruín y ruidosa caída del doctor Ignacio Chávez, y el llamado entonces fue nada menos que don Javier Barros Sierra, que no sólo había tenido un alto rango en la administración, como secretario de Estado, sino que había dirigido previamente una Facultad, la de Ingeniería. Ninguno de esos extremos se da en el caso de Martuscelli.

La Junta podría aplicar, saludablemente, un criterio general para disminuir el número de los elegibles. Se trata de que prefiera a los funcionarios que hayan pasado ya por el tamiz de la propia Junta de Gobierno. El origen de la designación de un funcionario en la Universidad puede ser relevante. Sin que ello implique aplicación concreta a caso alguno, ni mucho menos una acusación, es claro que en los nombramientos hechos por el rector pueden estar presentes elementos subjetivos

y coyunturales, nacidos de la mera circunstancia. Eso no ocurre, u ocurre menos, en las designaciones sometidas a la consideración de la Junta. Esta recibe ternas en cuya configuración suele participar, en mayor o menor medida, la comunidad de la escuela, facultad o instituto de que se trate. Como órgano colegiado que es, además, la Junta reúne el criterio de quince universitarios, que miden con su particular modo de ponderación las características de quien resulta escogido para un cargo de dirección al cabo de un proceso colectivo de deliberación.

Si ese criterio fuera atendible, la Junta tendría al menos que otorgar prioridad a quienes ya han comparecido delante de ella, que son los directores de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Jorge Madrazo; de Investigaciones Filológicas, Elizabeth Luna Trail; de Investigaciones Económicas, Fausto Burgueño; de Física, Miguel José Yacamán; y de las facultades de Arquitectura, Ernesto Velasco León; de Contaduría, Alfredo Adam Adam; de Filosofía, Arturo Azuela; de Ingeniería, Daniel Reséndiz; y de Medicina, Cano Valle. Algunos de ellos han sido ya reelegidos, lo que im-

plica que en dos oportunidades la Junta evaluó para bien sus rasgos universitarios. Claro que ello pudo ocurrir de cara a un contexto específico, pero de todas maneras el órgano electoral cuenta ya con un antecedente valioso y seguro por que proviene de sí mismo. Si además la Junta prescindiera de los candidatos procedentes de Medicina, Derecho e Ingeniería porque esas escuelas produjeron ya el número de rectores bastante para el primer medio siglo de esta universidad autónoma, el cuadro resultante sería más concreto.

El profesor Burgueño dio, por propia convicción, un paso que no debiera ser desdeñable para los otros candidatos, ni para la Junta. Consiste en dar a conocer al público universitario, y el general, y no sólo a la propia Junta, ya no digamos un plan de trabajo que acaso requiera por una parte disponer de información puntual de la que tal vez carezcan los candidatos, amén de que ese plan sería mejor con las aportaciones de la comunidad entera; pero sí un esbozo de cómo concibe la Universidad y, sobre todo, una noticia de su actitud ante el Congreso Universitario pendiente, que no debiera ser sino de claro compromiso con su realización.